

El resultado de las elecciones en Estados Unidos: implicación para América Latina y el Caribe

Dr. Luis Suárez Salazar¹

Instituto Superior de Relaciones
Internacionales «Raúl Roa García»

Introducción

Como sugiere su título, esta ponencia va dirigida a realizar una primera y seguramente incompleta aproximación a las contradictorias y diferenciadas implicaciones que el resultado de las elecciones presidenciales y parlamentarias de los Estados Unidos del 8 de noviembre de 2016 tendrán para los pueblos, las naciones y los gobiernos de los 33 Estados nacionales o plurinacionales, así como para algunos de los territorios aún sometidos a diferentes formas de dominación colonial por parte de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Holanda, ubicados al sur del río Bravo y de la península de Florida.

Para cumplir ese propósito, las páginas que siguen se dividirán en tres acápite. En el primero me referiré a los que he denominado objetivos estratégicos, generales y, en algunos casos, específicos que guiaron las es-

¹ Licenciado en Ciencias Políticas, Doctor en Ciencias Sociológicas y Doctor en Ciencias. Escritor y ensayista integrante de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), así como Profesor Titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales «Raúl Roa García (ISRI)», al igual que de las cátedras Ernesto Che Guevara, Simón Bolívar y de Estudios sobre el Caribe de la Universidad de La Habana. Actualmente integra los Grupos de Trabajo de Estudios sobre Estados Unidos y sobre el Caribe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Consejo Consultivo de ex presidentes de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS).

trategias inteligentes y algunas acciones hacia el sur político del continente americano desplegadas por las dos administraciones de Barack Obama. En el segundo, realizaré algunas referencias a algunos de los enunciados sobre *la familia de las Américas* plasmados en la reaccionaria Plataforma del Partido Republicano (PPR) aprobada en la Convención efectuada en Cleveland a fines de julio de 2016. Y, en el tercero, presentaré mis consideraciones preliminares sobre el escenario más probable de las políticas hacia América Latina y el Caribe que desplegarán la maquinaria de la política exterior de defensa y seguridad, así como económico-financieras e ideológico-culturales de los Estados Unidos, al menos, en los primeros años del *gobierno temporal* del controvertido y, para muchos analistas, *imprevisible* magnate inmobiliario y *miembro de la clase capitalista transnacional* Donald Trump.²

Como en otros de mis ensayos, ese escenario se elaborará desde los prin-

cipales conceptos teóricos y metodológicos de la prospectiva crítica. Estos parten del criterio de que el futuro es *más construible que previsible*. Por tanto, *no es único, ni lineal*. Al contrario, pueden vislumbrarse varios escenarios alternos. Ninguno está predeterminado, ya que dependen de los resultados de las acciones reactivas, preactivas y proactivas del *hombre colectivo*. En consecuencia, el porvenir es un *campo de batalla* (muchas veces violento) entre los sujetos sociales y políticos, estatales y no estatales, que *pugnan por imponer su poder para defender sus intereses*.³

En mi consideración, la utilización de esos conceptos es necesaria, ya que en la mayor parte de las aproximaciones que he podido leer sobre la que será la proyección externa de los Estados Unidos durante la próxima administración republicana se olvida que, con independencia de las posiciones personales de cualquier mandatario (por muy megalómano que sea, como es el caso de Donald Trump), la política interna y externa que desarro-

² En la literatura marxista, siempre se han diferenciado los términos Estado y Gobierno. Desde el reconocimiento del carácter socio-clasista de cualquier Estado, el primero alude a lo que se denomina *la maquinaria burocrática-militar* y los diferentes aparatos ideológico-culturales que de manera permanente garantizan la reproducción del sistema de dominación. Mientras que el Gobierno alude a los representantes políticos de las clases dominantes o de sectores de ellas que se alternan en la conducción de la política interna y externa de ese Estado. Curiosamente la diferenciación entre los *gobiernos permanentes y temporales* fue retomada por los redactores del famoso documento Santa Fe I. Con los primeros se referían a lo que en ese texto llamaban *grupos de poder y poderes fácticos*, mientras que los segundos aludían a los gobiernos surgidos de los diversos ciclos electorales u otros cambios no democráticos que se producen en diferentes países del mundo. De ahí la validez de emplear el término *gobierno temporal* para referirnos a las diferentes administraciones demócratas o republicanas que se han alternado en los Estados Unidos.

³ Francisco José Mojica: «Determinismo y construcción del futuro», en Francisco López Segrera y Daniel Filmus (coord.): *América Latina 2020: Escenarios, alternativas, estrategias*, FLACSO-Temas Grupo Editorial, Buenos Aires, No. 2, 2000, pp. 111-125.

llará esa potencia imperial durante su administración será *la resultante* de los consensos que se produzca entre los representantes políticos, militares e ideológico-culturales de diferentes sectores de las clases y los grupos dominantes que participen en las diferentes instancias de los poderes ejecutivo, legislativo y, en algunos casos, judicial. Igualmente, de las percepciones que estos tengan con relación a los resultados (positivos o negativos) de las políticas desplegadas por la administración precedente, tanto para sus propios intereses y cuotas de poder como para la preservación de la que he denominado *seguridad imperial* de los Estados Unidos.

Como he tratado de demostrar en diferentes publicaciones⁴, lo antes dicho contribuye a explicar la continuidad de los objetivos estratégicos, generales y, en algunos casos, específicos, al igual que de muchas de las estrategias y herramientas desplegadas y utilizadas por las diferentes administraciones, aun cuando estas hayan sido controladas por diferentes secto-

res de los partidos demócratas o republicanos estadounidenses. También los cambios de estrategias o el empleo de ciertas herramientas que se han producido entre una y otra administración e, incluso, durante los diferentes mandatos de algunas de ellas.

Los objetivos hemisféricos de las dos administraciones de Barack Obama

Como indiqué en una ponencia que presenté hace unas semanas en un evento internacional efectuado en la Universidad Nacional de Colombia, entre el 2009 y el 2016,⁵ la maquinaria de la política exterior de defensa y de seguridad estadounidense, al igual que sus aparatos económico-financieros, propagandísticos e ideológico-culturales emprendieron diversas acciones públicas, discretas, encubiertas o secretas dirigidas — según indicó Barack Obama durante su primera campaña electoral y reiteró en otros documentos posteriores — a *renovar* y a *prolongar a lo largo del siglo XXI el liderazgo estadounidense en las Américas*.⁶

⁴ Luis Suárez Salazar: *Madre América: Un siglo de violencia y dolor (1898-1998)*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2003; Luis Suárez Salazar: *Un siglo de terror en América Latina*, Ocean Sur (un proyecto de Ocean Press), Melbourne, Nueva York y La Habana, 2006; Luis Suárez Salazar: *Obama: La máscara del poder inteligente*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2010.

⁵ _____: «Las políticas de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe: una mirada después de restablecimiento de sus relaciones diplomáticas con Cuba», ponencia presentada en el evento académico internacional «América Latina en disputa: Estado, gobierno y sociedades en el nuevo milenio», realizado en Bogotá, Colombia, entre el 2 y el 4 de noviembre de 2016 con el auspicio de la Maestría de Estudios Políticos latinoamericanos y del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, así como de la Sociedad Latinoamericana de Economía y Pensamiento crítico (SEPLA), 2016a.

⁶ Barack Obama: *Renewing U.S. Leadership in the Americas*, Obama for America, Washington, 2008.

Con tal fin, durante sus dos administraciones, de manera unilateral o concertada con sus *amigos, socios o aliados*, estatales y no estatales de dentro y fuera del continente americano, la poderosa maquinaria burocrático-militar estadounidense (generalmente con el apoyo bipartidista del poder legislativo) emprendió diversas acciones orientadas a cumplir al menos los siguientes objetivos generales o específicos intervinculados:

1.- Desestabilizar y, donde y cuando le resultó posible, derrocar por medios predominantemente *institucionales* a aquellos gobiernos latinoamericanos y caribeños genéricamente calificados como *antiestadounidenses*. En particular, aunque no únicamente (como se demostró en Paraguay), a los gobiernos que eran (como fue el caso de Honduras hasta mediados de 2009) o todavía son miembros plenos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP): Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y la República Bolivariana de Venezuela. Contra los gobiernos de este último país, presididos por el comandante Hugo Chávez y por Nicolás Maduro, se desplegaron diversas estrategias contrarrevolucionarias bajo el supuesto de que su derrocamiento produciría un negativo *efecto dominó* sobre los gobiernos de los de-

más Estados integrantes del ALBA-TCP (incluido el de Cuba) y para las interrelaciones que estos habían desplegado con otros gobiernos centroamericanos y caribeños en los marcos de PETROCARIBE y del fondo ALBA-Caribe;

2.- Restaurar o fortalecer, según el caso, su multifacética dominación sobre México, sobre todos los Estados-nacionales ubicados en el istmo centroamericano, al igual que en el Caribe insular y continental (Belice, la República Cooperativa de Guyana y Surinam) con vistas a preservar su control sobre los recursos naturales y los bienes públicos (como el agua y la biodiversidad), al igual que sobre los diversos espacios geoestratégicos existentes en el Gran Caribe: el Golfo de México, los estrechos de la Florida y Yucatán, el Paso de los Vientos, el Canal de Panamá, el canal de la Mona y las diversas rutas aéreas, marítimas y terrestres que sirven para transitar entre el Sur y el Norte del continente americano, así como entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Para el cumplimiento de esos propósitos le resultó de mucha utilidad la continuidad de sus estrechos vínculos político-militares con los diversos gobiernos europeos (Francia, Gran Bretaña y Holanda) que mantienen diversas posiciones coloniales en el Caribe insular y continental, así como el fortalecimiento de la dominación colonial estadounidense sobre Puerto Rico. Esta registró un nue-

vo salto de calidad con la aprobación de la denominada Ley PROMESA, aprobada en el 2016 por Barack Obama, y la cual estableció una Junta Fiscal para garantizar, primero que todo, que los gobiernos de ese Estado Libre Asociado pagarán la multimillonaria deuda contraída con diversas instituciones financieras estadounidenses, incluidos algunos fondos buitres;⁷

3.- Lograr una solución político-militar favorable a los intereses geopolíticos y geoeconómicos estadounidenses de la prolongada guerra civil — con contenidos de liberación nacional y social — que hasta mediados de 2016 se estaba desarrollando en Colombia. Sin importar los inmensos costos humanos, sociales y ecológicos provocados por la voluminosa ayuda económica y militar que le ofrecieron diversas administraciones demócratas y republicanas estadounidense,⁸ los éxitos de los gobiernos presididos por Álvaro Uribe y por Juan Manuel Santos, al igual que por las represivas fuerzas militares colombianas en su cruenta guerra *contra la insurgencia y el narco-terrorismo* fueron presentados por la administración de Barack Obama y por el Pentágono como *el modelo* a seguir por los gobiernos y las fuerzas ar-

madas y policiales de otros países de dentro y fuera del hemisferio occidental enfrentados a semejantes amenazas; en particular, por México, por los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), así como por Perú y Paraguay;⁹

4.- Subordinar a los intereses geoeconómicos y geopolíticos estadounidenses a los gobiernos de todos los Estados nacionales del hemisferio occidental ubicados en el *arco del Pacífico*: Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Funcional a ese propósito fueron las negociaciones del Tratado Transpacífico (TPP) impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos como parte de sus llamados *pilares asiáticos*, así como su constante respaldo a la Alianza para el Pacífico (ALPA), institucionalizada en el 2011 entre los gobiernos de México, Colombia, Perú y Chile, presididos por Felipe Calderón, Juan Manuel Santos, Allan García y Sebastián Piñera, respectivamente. Sus antecesores, previamente, habían firmado asimétricos tratados bilaterales de libre comercio con Estados Unidos y ellos o sus sucesores (como fue el caso del mandatario peruano Ollanta Huma-

⁷ Alejandro Torres: «La Junta Fiscal», power point enviado por el autor el 11 de julio de 2016.

⁸ Oto Higuera: «Plan Colombia: un balance a 15 años de su implementación», en: www.facebook.com/America.Latina.en.Movimiento, consultado el 25 de febrero, 2016.

⁹ Arelene Tickner: Colombia, the United States, and Security Cooperation by Proxy, Washington Office on Latin America, marzo, 2014; Sarah Kinoshian, John Lindsay-Poland y Lisa Haugaard: «Estados Unidos no debería exportar el 'éxito' de la guerra de Colombia contra las drogas», en: es.insightcrime.org/analisis/estados-unidos-no-deberia-exportar-exito-guerra-colombia-contra-drogas, consultado el 12 de julio de 2015.

la) firmaron diversos tratados en el campo de la defensa y la seguridad con las dos administraciones de Barack Obama, orientados a *compartir responsabilidades y costos* con la maquinaria militar estadounidense en la *defensa del hemisferio Occidental*,¹⁰

5.- Contrarrestar las amenazas que le plantearon a la *hegemonía* estadounidense en el Hemisferio Occidental y, en particular, en Suramérica la paulatina e inconclusa transformación de la República Federativa de Brasil en una *potencia global*, al igual que aquellas posturas *populistas radicales* o desfavorables a los intereses de los Estados Unidos asumidas por algunos de los partidos (o sectores de ellos) integrantes de las heterogéneas coaliciones políticas que hasta el 2012 apoyaron al gobierno paraguayo presidido por Fernando Lugo, así como las que, hasta el 2015 y el 2016, habían sustentado los gobiernos de Argentina y Brasil, presididos por Cristina Fernández de Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, respectivamente. Asimismo, por algunos de los partidos integrantes del Frente Amplio-Encuentro Progresista que sustentaron y todavía sustentan a los gobiernos uruguayos presididos por José Mujica y Tabaré Vázquez. (Lo antes dicho y lo que veremos en el numeral si-

guiente contribuye a explicar el rápido respaldo que le ofreció la administración de Barack Obama al gobierno argentino presidido por el multimillonario neoliberal Mauricio Macri, así como, antes de que se consumara el *golpe de estado parlamentario-mediático y judicial* que en el 2016 se produjo en Brasil contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff);

6.- Dificultar la reforma y la ampliación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) impulsada por los gobiernos de sus Estados Miembros antes mencionados, así como la profundización de los acuerdos en los campos políticos y de la defensa adoptados por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), en especial, aquellos que cuestionaron los intereses geopolíticos, geoeconómicos (incluidos el control de los recursos naturales estratégicos y los bienes públicos) y geoestratégicos apetecidos por los grupos dominantes en Estados Unidos, cuáles son las estratégicas cuencas de los ríos Orinoco, Amazonas y de la Plata, el portentoso acuífero Guaraní, al igual que los archipiélagos ubicados en el Atlántico Sur y los estrechos y las aguas que lo conectan con el Pacífico Sur y con la Antártida;

7.- Entorpecer las acciones de los diversos gobiernos de América Lati-

¹⁰ Luis Suárez Salazar: «La política hacia América Latina y el Caribe bajo la Presidencia de Barack Obama: una mirada desde la perspectiva crítica», en Darío Salinas (coordinador): *América Latina: nuevas relaciones hemisféricas e integración*, Universidad Iberoamericana A.C., Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, México, [2014] 2016.

na y el Caribe que, entre fines de 2008 y de 2011, condujeron a la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y, como no lo lograron, evitar que sus resoluciones y prácticas obstaculizaran el adecuado cumplimiento de los diversos acuerdos y planes de acción aprobados por las Cumbres de las Américas (ordinarias o extraordinarias) celebradas entre 1994 y el 2015, al igual que por los principales órganos político-militares y político-jurídicos del Sistema Interamericano: la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus diversas Comisiones; la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Junta Interamericana de Defensa (JID).

Funcional a ese último propósito fue la acérrima defensa por parte de los representantes de los Estados Unidos de las controversiales labores desplegadas por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y por la CIDH;¹¹ el apoyo que —modificando sus posturas anteriores y sobre la base de la Ley al respecto firmada por Barack Obama a fines de 2013— el Departamento de Estado comenzó a ofrecerle a *la reforma* de esa organización propuesta por el ex secretario general de ese organismo, José Miguel Insulza, y reimpulsada por su controvertido

sustituto, Luis Almagro. Paralelamente, en correspondencia con la *nueva etapa* de sus relaciones con Cuba anunciada el 17 de diciembre de 2014, así como con sus perdurables propósitos de producir cambios del (o en el) *régimen cubano*,¹² la administración de Barack Obama finalmente aceptó que el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros (CEEM) de la República de Cuba, Raúl Castro, participara, por primera vez en la historia de esos eventos, en la VII Cumbre de las Américas realizada en Panamá en abril de 2015.

Según habían adelantado algunos analistas estadounidenses,¹³ tal decisión tuvo como uno de sus propósitos superar las grandes dificultades que sufrió el desenvolvimiento de ese cónclave durante su VI Cumbre efectuada en el 2012 en Cartagena, Colombia, al igual que re-legitimar a la OEA, en su conjunción con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como *la entidad diplomática multilateral primordial* en la supervisión y gestión de los acuerdos de esas Cumbres destinados al *fortalecimiento de la paz y la seguridad, la promoción y consolidación de la democracia representativa, la resolución de conflictos regionales, el fomento del crecimiento económico y la cooperación al desarrollo, la facilitación del comercio, la lucha contra el tráfico ilícito de dro-*

¹¹ En: Aportes DPLF: «La reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», No. 19, Año 7, abril, Washington, 2014.

¹² Barack Obama: Directiva Presidencial De Políticas – Normalización Estados Unidos-Cuba (Directiva Presidencial De Políticas/Ppd-43), The White House, Washington, October 14, 2016.

¹³ Michael Shifter: «Una relación paradójica», Foreign Affairs: Latinoamérica, Vol. 14: No. 2, 2014, pp. 82-88. Disponible en: www.fal.itam.mx.

gas y el crimen transnacional y el apoyo a la Comisión de Derechos Humanos.¹⁴

Ese propósito coincidió con el interés del Pentágono, expresado en *La política de defensa para el hemisferio occidental* hasta el 2023 difundida en octubre de 2012 por el entonces secretario de Defensa Leon Panetta, en la que, entre otras cosas, se indicó:

Los Estados Unidos, mediante su participación en la OEA y mediante cada uno de nuestros compromisos ínter militares, *promoverán un férreo sistema de cooperación en materia de defensa que procure hacer frente a los desafíos complejos del siglo XXI. [...] Nos esmeraremos por reformar las instituciones existentes y aprovecharlas a fin de lograr una mayor eficacia y unidad de propósitos para abordar esta problemática que afecta a todos los países del hemisferio* (las cursivas fueron incorporadas por el autor de esta ponencia).¹⁵

Con esos y otros fines, a partir de 2014, *la diplomacia político-militar* estadounidense, de conjunto con la Secretaría de la JID, comenzó a impulsar la elaboración de un nuevo instrumento hemisférico que sustituya al inoperante Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), así como la institucionalización de una Comisión Interamericana de Defensa subordinada a la OEA que articule las labores de las Conferencias de Ministro de Defensa de las Américas, de Jefes de

Ejércitos, Marina y Aviación, así como de los subsistemas regionales de defensa existentes en el hemisferio occidental;¹⁶ incluidas las estrechas relaciones ya establecidas entre las fuerzas militares de Canadá con el Comando Norte de Defensa Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés) y con el Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidenses (NORTH-COM), cuya área de responsabilidad abarca el territorio, las costas y el espacio aéreo de Canadá, de los Estados Unidos, incluida Alaska, de México y del archipiélago de las Bahamas, ubicado en la entrada atlántica del estrecho de La Florida.

En los criterios del Jefe de esos dos comandos, almirante William Gortney, esa articulación está orientada a enfrentar las *amenazas tradicionales y no tradicionales* que les plantea a los Estados Unidos la proyección militar, política y económica de Rusia y de la República Popular China en el hemisferio occidental, asimismo, las acciones ciberespaciales, las pruebas nucleares y el continuo desarrollo de misiles balísticos por parte de Corea del Norte, las actividades diplomáticas y las capacidades de misiles balísticos de largo alcance y el programa espacial que está desarrollando Irán y los eventuales ataques terroristas contra el territorio estadounidense que, en el futu-

¹⁴ Congress of the United States of America 2013: Organization of American States Revitalization and Reform Act of 2013.

¹⁵ Leon Panetta: *La política de defensa para el Hemisferio Occidental*. Department of Defense United States of America, Washington, 2012.

¹⁶ JID: El sistema interamericano de Defensa, Secretaría Junta Interamericana de Defensa, Washington, 2013.

ro, pudieran emprender el Estado Islámico y Al-Qa'ida.¹⁷

Una mirada a algunos enunciados de la PPR

No tengo espacio para plasmar mis consideraciones acerca de los importantes logros para la seguridad imperial de los Estados Unidos obtenidos durante las dos administraciones de Barack Obama (en particular durante su segundo mandato), basados en el cumplimiento total o parcial de cada uno de los objetivos generales y específicos señalados en el acápite anterior; tampoco para referirme a los que no pudo cumplir. No obstante, en mi apreciación, unos y otros objetivos serán retomados por la próxima administración republicana; ya que esta, al igual que su antecesora, pero con un lenguaje diferente, quedó comprometida (entre otras cosas que veremos después) a mantener la *posición natural* de los Estados Unidos como líder del mundo libre, a restablecer la ley y el orden y a superar la crisis que está atravesando la seguridad nacional estadounidense.¹⁸

De ahí que, a pesar de la acritud de los tres debates que se produjeron entre la candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton, y del candidato republicano, Donald Trump, los cambios que ambos se proponían introducir en las políticas hacia América Latina y el Caribe pre-

viamente desplegadas por el gobierno temporal de Barack Obama no estuvieron en el centro de la campaña electoral. Esto me induce a pensar que ambos candidatos estaban decididos a mantener esos objetivos así como a continuar la mayor parte de las *estrategias inteligentes* elaboradas e implementadas por la poderosa maquinaria de la política exterior de defensa y seguridad de los Estados Unidos durante los ocho años de esa administración.

Entre otras razones, porque casi todas ellas contaron con el mayoritario respaldo bipartidista en ambas cámaras del Congreso. Como veremos después, una de las pocas excepciones que confirman esa regla fueron el rechazo que encontraron en el Senado o en el la Cámara de Representantes las diferentes enmiendas a las llamadas *leyes del embargo* contra Cuba que presentaron diversos senadores o representantes de ambos partidos políticos después del 17 de diciembre de 2014; incluida la dirigida a restituirle el derecho de los ciudadanos estadounidenses a viajar y a gastar su dinero en la mayor de las Antillas sin que mediara ninguna licencia de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por su sigla en inglés).

De ahí que los dos únicos problemas vinculados directamente a las

¹⁷ William Gortney: Statement of Admiral William E. Gortney, UNited States Navy Commander, United States Northern Command and North American Aerospace Defense Command before The Senate Armed Services Committee, Washington, March 10, 2016.

¹⁸ PPR: Plataforma del Partido Republicano, aprobada en la Convención de Cleveland, 19 julio, 2016.

políticas hacia el Hemisferio Occidental que se abordaron en los diferentes discursos del candidato republicano fueron los vinculados a los negativos efectos que, según sus reiteradas opiniones xenófobas y presuntamente *proteccionistas* y *anti neoliberales*, estaban produciendo en la sociedad, en la cultura y en la economía estadounidense las políticas migratorias y comerciales previamente desplegadas por la administración de Barack Obama y, dentro de esta última, la necesidad de renegociar con el gobierno mexicano el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que, desde 1994, venían aplicando todas las administraciones demócratas y republicanas.

Sin embargo, en la reaccionaria PPR, se acentuó la importancia de darle continuidad, con escasos cambios, a todas las estrategias en los campos comercial, energético, de la defensa y la seguridad que durante la administración de Obama se han venido desplegando de conjunto con los sucesivos gobiernos de Canadá, encabezados por sus primeros Ministros, Stephen Harper y Justin Trudeau, así como con los eslabonados presidentes de México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. A pesar de los ataques verbales contra los mexicanos emprendidos por Donald Trump y de su amenaza de que si ganaba las elecciones, el gobierno mexicano tendría que financiar el muro que desde más de 20 años se viene construyendo en la extensa

frontera terrestre entre ambos países, en la antes mencionada PPR se indicó:

Nuestra atención a los temas del comercio y del medioambiente contribuirá a un fuerte crecimiento económico y a la prosperidad de las Américas. Agradecemos a nuestros vecinos de México y Canadá que hayan sido nuestros socios en la lucha contra el terrorismo y en la guerra contra las drogas. El pueblo mexicano merece nuestra asistencia por su brava resistencia a los carteles de las drogas que trafican con la muerte a ambos lados de nuestras fronteras. Su rica herencia cultural y religiosa, presente en millones de nuestros ciudadanos, deberá contribuir a un mayor entendimiento y cooperación entre nuestros países. Nuestros vecinos canadienses pueden contar con nuestra cooperación y respeto. Para avanzar en la independencia energética de América del Norte, intentaremos revertir el bloqueo de la actual administración al oleoducto Keystone XL. Además de su valor económico, ese proyecto ha devenido un símbolo de la contradicción entre el deseo público al desarrollo económico y la hostilidad gubernamental al crecimiento. Nosotros estamos con el pueblo.¹⁹

A su vez, con el lenguaje antediluviano empleado en algunas de sus partes, en esa plataforma se indicó:

¹⁹ *Ibidem*: 50.

*Un presidente republicano nunca abrazará a un dictador marxista, ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. El actual presidente del poder ejecutivo ha permitido que ese país se haya convertido en un estado narco-terrorista y que una avanzada iraní amanezca a América Central, así como que Venezuela sea un cielo seguro para los agentes de Hezbollah. Y añadió: Hoy con su país arruinado por el socialismo y en la senda del caos, el pueblo venezolano está luchando por restaurar su democracia y recuperar sus derechos. Cuando triunfen, como seguramente ocurrirá, los Estados Unidos estarán listos para ayudarlos a retornar a la familia de las Américas.*²⁰

Sin duda, tales enunciados expresaron el tajante rechazo de los redactores de esa plataforma (algunos de los cuales ocuparán prominentes posiciones en la administración de Donald Trump) a las conversaciones de alto nivel entre los actuales gobiernos de los Estados Unidos y de Venezuela que comenzaron a desarrollarse desde abril del 2015; pero, como se indicó en el primer acápite de este escrito, el contenido de esos enunciados se corresponden con las multifacéticas acciones contra la Revolución Bolivariana desplegadas por las dos administraciones de Barack Obama. Y, en particular, con los agresivos planes que, desde los primeros meses de 2015, ha venido organizando el SOUTHCOM (las llamadas Venezue-

la Freedom 1 y 2 Operation) después que el antes mencionado presidente estadounidense dio a conocer la Orden Ejecutiva de comienzos del 2015 en la que calificó al actual gobierno venezolano como *una amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior y la seguridad nacional estadounidense.*²¹

En esa misma tónica y en correspondencia con las estrategias hacia Colombia desplegadas por la maquinaria de la política exterior, de defensa y la seguridad de los Estados Unidos, así como rechazando de manera implícita el respaldo que la administración de Barack Obama le había ofrecido a los acuerdos de paz que en julio de 2016 todavía se estaban negociando en La Habana entre los representantes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del gobierno de ese país, la antes mencionada PPR señaló:

Reafirmamos nuestra amistad y admiración por el pueblo colombiano y llamamos a los congresistas republicanos a expresar su solidaridad con sus largas décadas de lucha contra las terroristas FARC. Los sacrificios y sufrimientos del pueblo colombiano no deben ser traicionados por el ascenso al poder de los asesinos y señores de las drogas.²²

²⁰ Idem.

²¹ Mark Weisbrot: «Obama face another disastrous Summit due to sanctions against Venezuela», en *The Hill*, April, 9, 2015.

²² PPR: Plataforma del Partido Republicano, aprobada en la Convención de Cleveland, ob. cit., 19 julio, 2016.

Llama la atención que ese último sintagma formó parte de los argumentos empleados por el reaccionario ex presidente y ahora senador colombiano y líder del mal llamado Cambio Democrático, Álvaro Uribe (estrechamente vinculado a algunos de los congresistas cubano-estadounidenses, como Mario Díaz Balart, que apoyaron la candidatura de Donald Trump), para movilizar votos contra los acuerdos de paz firmados en La Habana en el plebiscito para tratar de *blindarlos* que se efectuó en Colombia el 2 de octubre de 2016. Posteriormente, durante la ratificación de la segunda versión de esos acuerdos aprobada por el Senado y en la Cámara de Representantes, los parlamentarios de Cambio Democrático también se opusieron a la segunda versión de esos acuerdos firmada en Bogotá a fines de noviembre de ese año entre el Jefe de las FARC, Rodrigo Londoño (alias Timochenko) y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

Pero mucho antes de que eso ocurriera, Donald Trump, como es su costumbre, comenzó a las declaraciones anteriores que había realizado alrededor de las políticas hacia Cuba desarrollada por la administración de Barack Obama después del 17 de diciembre de 2014. En efecto, buscando captar el apoyo de los electores opuestos a esas políticas, el entonces candidato presidencial republicano comenzó a resaltar sus desacuerdos y, en la misma medida que los fue acentuando, fue asumiendo el

lenguaje ultraconservador en el que está redactada la PPR. Al respecto, en esta se indicó:

Queremos darle la bienvenida al pueblo de Cuba en nuestra familia hemisférica, después que sus corruptos gobernantes sean sacados del poder y rindan cuentas por sus crímenes contra la humanidad. Estamos con las Damas de Blanco y con todas las víctimas del asqueroso régimen que está aferrado al poder en La Habana. Nosotros decimos claramente: ellas han sido traicionadas por aquellos que actualmente controlan la política exterior estadounidense. La *apertura hacia Cuba* de la actual administración fue un vergonzoso acomodo a las demandas de los tiranos. Solo fortalecerán a esa dictadura militar. Llamamos al Congreso a defender las leyes estadounidenses que plantean las condiciones para eliminar las sanciones contra la isla: la legalización de los partidos políticos, prensa independiente y elecciones libres y con supervisión internacional. Reclamamos una plataforma [aérea] para las transmisiones de Radio y TV Martí y la promoción de acceso a Internet como herramienta tecnológica para fortalecer el movimiento pro-democracia en Cuba. Nosotros apoyamos el trabajo de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre y afirmamos los principios de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, reconociendo el derecho de los cubanos a escaparse del comunismo.²³

Es imprescindible resaltar que ese ofensivo y rancio lenguaje fue el em-

²³ Idem.

pleado por Donald Trump en el exabrupto que difundió inmediatamente después que conoció la desaparición física del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. El irrespetuoso contenido de ese mensaje llevó al joven y prestigioso historiador cubano, Elier Ramírez Cañedo, a preguntarse si, al menos en lo correspondiente a Cuba, el próximo mandatario republicano había decidido sustituir las herramientas del *poder inteligente* empleadas por Barack Obama, por las del *poder estúpido* previamente empleadas por otros mandatarios demócratas y republicanos estadounidenses. Acto seguido agregó:

Si Obama se propuso con inteligencia captar simpatías en el pueblo cubano, ya Trump se ganó para siempre la animadversión de la gran mayoría del pueblo cubano con sus declaraciones sobre Fidel. Trump debió estar mejor asesorado y haber sabido que este pueblo es profundamente fidelista y que meterse con Fidel es como meterse con quien es considerado el padre de millones de cubanos, una de las raíces más sensibles de nuestra espiritualidad, del orgullo y la dignidad que significa ser cubano. El pueblo de Cuba no olvida jamás esas ofensas, sobre todo si vienen en horas de dolor y tristeza. Ojalá el recién electo presidente de los Estados Unidos rectificara su conducta, pero de cualquier manera ya

ha sembrado un precedente nefasto.²⁴

El escenario más probable de las políticas hacia América Latina que desplegará la administración de Donald Trump.

Cualesquiera que sean las consideraciones que merezcan esas y otras consideraciones expresadas por el autor de esa cita, todo lo dicho en el acápite anterior y otros elementos excluidos en beneficio de la síntesis, dejan planteadas varias interrogantes que trascienden con mucho las políticas hacia Cuba que emprenderá el próximo gobierno temporal estadounidense. En lo que tiene que ver con los contenidos de esta ponencia, ¿abandonará esa administración todas o solo algunas de las ingeniosas combinaciones entre las herramientas de los llamados *hard* y *soft powers* (*smart power*) empleadas por la administración de Barack Obama con vistas a cumplir todos los objetivos estratégicos, generales o específicos planteados o no en el primer acápite de este trabajo? ¿Esas herramientas serán sustituidas por las propias del que Elier Ramírez denomina *stupid power*?

En mi consideración esas preguntas no tienen una respuesta general. Por consiguiente, considero que para realizar anticipaciones acerca de las estrategias y las herramientas que empleará en sus interrelaciones con América Latina y el Caribe la administración que se inaugurará el 20 de

²⁴ Elier Ramírez Cañedo: «Donald Trump y Cuba: ¿del smart power al stupid power?», en *Boletín Por Cuba* (Año 14, No. 96), La Habana, 6 de diciembre, 2016.

enero de 2017, resulta imprescindible realizar un análisis *case by case* que, además de los antecedentes ideológicos, políticos o militares de los altos funcionarios que ya ha nombrado o que nombrará Donald Trump, tome en cuenta las percepciones que tienen entre los diferentes actores del gobierno permanente de los Estados Unidos sobre los resultados favorables o desfavorables para su poder y sus intereses, así como para la seguridad imperial de los Estados Unidos que tuvieron las políticas hacia el hemisferio occidental emprendidas por la administración precedente.

Ya indiqué que en este escrito no tengo espacio para presentar mis consideraciones sobre los desiguales resultados de esas políticas. Sin embargo, para cumplir los propósitos que plantee en su introducción, creo imprescindible señalar que, en mi apreciación, la próxima administración mantendrá la mayor parte de las estrategias desplegadas y las herramientas utilizadas por la maquinaria de la política exterior, económica, ideológica, de defensa y seguridad de los Estados Unidos durante el gobierno temporal de Barack Obama para garantizar la subordinación de los actuales gobiernos de Canadá y de México a las necesidades geopolíticas, geoeconómicas y geoestratégicas de los Estados Unidos; incluidas las vinculadas con la otrora llamada Alian-

za para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN) impulsada por la administración de George W. Bush, de consuno con el gobierno neoconservador del Primer Ministro canadiense Stephen Harper (2006-2015) y del derechista presidente mexicano Felipe Calderón (2005-2011).

Aunque en los años posteriores se presentaron ciertas contradicciones entre Harper, Obama y el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en la más reciente Cumbre de América del Norte efectuada en Ottawa en junio de 2016, esos dos últimos mandatarios, junto al entonces recién electo primer ministro liberal canadiense, Justin Trudeau, adoptaron diferentes acuerdos para continuar profundizando *la integración de América del Norte*.²⁵ Como ya vimos, la continuación de esa integración con normas ambientales menos exigentes que las actualmente vigentes, estuvo incluida en la PPR. Por consiguiente, con independencia de las renegociaciones del TLCAN con el actual gobierno de México anunciada por Donald Trump como una de las prioridades de sus *primeros cien días en la presidencia* no se abandonará ese propósito largamente perseguido por los representantes políticos, militares e ideológico culturales de diferentes sectores de las clases dominantes estadounidenses; incluidos los dueños y gerentes de las principales corpo-

²⁵ Fidel Vascós: «La Cumbre de América del Norte en Ottawa», ponencia presentada en la XIII Conferencia de Estudios Americanos «Realidades y perspectivas de los procesos progresistas y de Izquierda en Nuestra América», convocada por el Centro de Investigaciones de Política Internacional, La Habana, 19 al 21 de octubre, 2016.

raciones transnacionales que ya tienen incluidos sus enclaves en México entre los eslabones de sus correspondientes *cadena de valor*.

Algo parecido puede decirse de las estrategias desplegadas por Barack Obama para fortalecer su multifacética dominación sobre ese país, sobre todos los Estados-nacionales ubicados en el istmo centroamericano, al igual que en el Caribe insular y continental (Belice, la República Cooperativa de Guyana y Surinam). Entre ellas, todas las acciones desplegadas por el Departamento de Estado, por el NORTHCOM y por el Departamento de Seguridad de la Patria dirigidas a *bajar* la frontera de seguridad imperial de los Estados Unidos hasta el norte de Guatemala y de Belice. Igualmente, las acciones emprendidas por todas esas estructuras del poder ejecutivo y del SOUTHCOM para contener y tratar de derrotar las *amenazas no tradicionales a su seguridad nacional* en los correspondientes territorios y en las aguas jurisdiccionales de los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica, al igual que de Costa Rica, Panamá y de diversos Estados integrantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Lo antes dicho —junto a los persistentes afanes del SOUTHCOM y de la IV Flota de la Marina de Guerra estadounidense de controlar los espacios marítimos y las rutas aéreas del Mar Caribe y del Golfo de México— seguirá teniendo múltiples implicaciones negativas para los actuales gobiernos de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, encabezados

por Guillermo Solís, Salvador Sánchez Cerén y Daniel Ortega; ya que en esos tres países, además de continuar las estrategias indicadas en el párrafo anterior, la administración de Donald Trump y las fuerzas más conservadoras de los partidos demócrata y republicano ampliarán el apoyo que ya le han venido ofreciendo a las fuerzas sociales y políticas de la derecha costarricense, salvadoreña y nicaragüense.

Por tanto, es de esperar que la próxima administración fortalezca los condicionamientos que ya se le han venido imponiendo al gobierno salvadoreño para recibir los fondos que le corresponden de los 750 millones de dólares aprobados en el presupuesto de 2017 por el Congreso de los Estados Unidos para apoyar el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (asesorado y monitoreado por el BID), así como de los más de 300 millones de dólares dirigidos a fortalecer en el propio año la implementación de la Iniciativa para la Seguridad de América Central (CARSI, por sus siglas en inglés) impulsada desde el 2010 por el gobierno temporal de Barack Obama.

También es de esperar que la próxima administración estadounidense le entregue al actual gobierno de Costa Rica los 30 millones de dólares en ayuda militar que en agosto de 2016 Obama le ofreció a su homólogo costarricense a cambio de su *ayuda* para contener las migraciones incontroladas que se siguen produciendo en Centroamérica, así como

para continuar edificando las instalaciones de la cada vez más militarizada Guardia Civil costarricense que el SOUTHCOM está equipando con vistas a habilitar nuevas facilidades para el desplazamiento de sus fuerzas navales hacia las costas costarricenses del Océano Pacífico y del Mar Caribe. Asimismo, seguramente el nuevo mandatario estadounidense aprobará rápidamente la llamada *Nicaragua Act* que se presentó en ambas cámaras del Congreso en los meses previos a la reelección de Daniel Ortega. Para los senadores y representantes demócratas y republicanos promotores de las sanciones incluidas en esa Ley, los comicios presidenciales que se realizaron en noviembre de 2016 en Nicaragua fueron fraudulentos; entre otras razones, porque no fueron supervisados por la OEA. Para tratar de evitar esas sanciones, el gobierno nicaragüense aceptó que ese organismo supervisara las próximas elecciones municipales.

Por otra parte, a pesar del rechazo de la próxima administración republicana al TPP, se mantendrá su apoyo político-diplomático a la ALPA y a todos los acuerdos en el campo político, económico, militar y de seguridad tanto nacional, como *hemisférica* previamente firmados por el gobierno de Barack Obama con sus contrapartes de Colombia, Perú y Chile; incluido su apoyo al denominado Colombia Peace, Plan impulsado por esa administración demócrata (con el respaldo del Congreso y del Pentágono) para *ayudar* al actual y a los futuros gobiernos colombianos a *ganar la paz* tanto

como los ayudaron a *ganar la guerra* diferentes administraciones estadounidenses demócratas y republicanas.

Paralelamente, la administración de Donald Trump continuará las diversas acciones públicas, discretas y encubiertas que ha venido desplegando la actual administración con vistas a debilitar a la Revolución Ciudadana y favorecer la victoria de las fuerzas de la derecha ecuatoriana en los comicios presidenciales y parlamentarios de febrero de 2017. Por tanto, cualesquiera que sean los resultados de esos comicios, se fortalecerán las relaciones del Partido Republicano y de otras instituciones de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) con todos los sectores de la derecha ecuatoriana, al igual que con la políticamente fortalecida derecha chilena. Contando con ese apoyo, los partidos que la integran redoblarán sus esfuerzos para derrotar al candidato presidencial que presentará la heterogénea coalición ahora denominada Concertación por la Democracia-Nueva Mayoría en los comicios presidenciales que se efectuarán a fines del próximo año. Ese empeño se verá favorecido por las grandes debilidades que ya exhibe el gobierno de esa coalición política, presidido por Michelle Bachelet.

Asimismo, la administración de Donald Trump fortalecerá el ostensible respaldo político que le ha venido dando su antecesor demócrata a los gobiernos derechistas y *neoliberales* actualmente instalados en Argentina, Brasil y Paraguay. Y, al igual que ya venía haciendo la administración de

Barack Obama, continuará sus acciones dirigidas a debilitar y, si le fuera posible, derrocar al gobierno boliviano presidido por Evo Morales hasta el 2020. También a debilitar aún más a los sectores *populistas radicales* y *anti estadounidenses* que todavía conservan ciertas influencias en la elaboración de las ambivalentes políticas internas y externas que ha venido desarrollando el gobierno uruguayo presidido por Tabaré Vázquez. Tales acciones se complementarán con un mayor respaldo por parte de los partidos Demócrata y Republicano a los partidos Blanco y Colorado con vistas a lograr la derrota del candidato que presente el Frente Amplio-Encuentro Progresista en las elecciones presidenciales de 2018. Asimismo, a los que presente la derecha golpista brasileña en los comicios de igual carácter del mismo año.

Como ya venía ocurriendo durante el último año de la administración de Barack Obama, en lo inmediato todas esas acciones deberán conducir a la profundización de la crisis que está sufriendo el MERCOSUR y, por carácter transitivo, al debilitamiento de la UNASUR y de la CELAC. Igualmente, a redoblar las acciones que ya venía desplegando diversas instancias de la administración de Barack Obama para lograr *el cerco y la asfixia*, así como *la implosión* de Venezuela con vistas a justificar, lo más rápidamente que les resulte posible y con el respaldo de la *comunidad internacional*, [la] *interven-*

ción humanitaria para mantener la paz y salvar vidas en ese país suramericano prevista en la última fase de la Venezuela Freedom 2 Operation²⁶ que, como se indicó, desde hace meses, ha venido organizando el SOUTHCOM al amparo de la Orden Ejecutiva de Barack de Obama de 2015, ratificada en marzo de 2016.

Con tal fin, la administración de Donald Trump discontinuará los canales de diálogo entre altos funcionarios del Departamento de Estado y del actual gobierno venezolano que se habían habilitado desde la primera y hasta ahora única reunión que sostuvieron los presidentes de ambos, Barack Obama y Nicolás Maduro, durante la VII Cumbre de las Américas efectuada en Panamá en abril de 2015. Pero, como se vio, la antes mencionada administración demócrata no abandonó sus propósitos contrarrevolucionarios. Por consiguiente, con la cancelación de sus diálogos con el gobierno venezolano, la próxima administración republicana estimulará a las fuerzas más reaccionarias de la mal llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) a abandonar definitivamente las complicadas negociaciones que, bajo los auspicios de la UNASUR y del Vaticano, se venían desplegando con el que la PPR denominó *dictador marxista*, quien ha permitido que Venezuela *se haya convertido en un estado narco-terrorista, en una avanzada iraní en América Central y en un cielo seguro para los agentes de Hezbollah*.

²⁶ SOUTHCOM: Venezuela Freedom-2 Operation, 25 de febrero de 2016, difundida y traducida por *Red Voltaire*, 22 de mayo, 2016.

Hay que resaltar que todos esos elementos habían sido incluidos entre los *complejos desafíos no tradicionales* a la seguridad nacional estadounidense listados por el actual Jefe del SOUTHCOM, almirante Kurt Tidd, en la intervención que realizó el 10 de marzo de 2016 ante el Comité de Servicios Armados del senado estadounidense. En esa mirada actual y prospectiva Tidd también incluyó la existencia de *redes criminales transnacionales bien organizadas, bien financiadas, bien armadas y tecnológicamente avanzadas*; las migraciones de *extraños de interés especial* entre los que pudieran incluirse *luchadores terroristas extranjeros* vinculados al Estado Islámico e interesados en emprender actos terroristas en los Estados Unidos o en sus *naciones aliadas*. Igualmente, *las intenciones del actual gobierno iraní de incrementar sus vínculos económicos, científicos y culturales con América Latina; la existencia de una extensa red de militantes y simpatizantes de la organización libanesa Hezbollah, algunos de los cuales están involucrados en el lavado de dinero y en otras actividades ilícitas*, así como en el mantenimiento de *una infraestructura capacitada para emprender o apoyar actos terroristas*.²⁷

Acorde con esos conceptos, en el futuro previsible, la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos continuará respaldando financiera y militarmente todas las acciones previstas en

la Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI, por su sigla en inglés) previamente impulsadas por la administración de Barack Obama. A la par, los partidos Demócrata y Republicano y las otras instituciones integrantes de la NED, redoblarán sus acciones dirigidas a apoyar a las fuerzas de la derecha que actúan en todos los Estados del Caribe insular y continental integrantes del ALBA-TCP, al igual que en los Estados de la CARICOM y del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) signatarios de los acuerdos de PETROCARIBE.

Con esas y otras acciones — como el condicionamiento de los fondos que aprobó el Congreso estadounidense para el impulso de la Iniciativa para la Seguridad Energética de Centroamericana y el Caribe impulsada desde comienzos de 2015 por la administración de Barack Obama — se buscará debilitar la oposición que hasta ahora han expresado los gobiernos de los Estados integrantes de la CARICOM a las propuestas de aplicarle a Venezuela las sanciones previstas en la Carta Democrática de la OEA impulsadas por su actual Secretario General, Luis Almagro; comprometido con el Departamento de Estado a impulsar *la reforma* de la OEA coincidente con los objetivos de la ya mencionada Ley al respecto firmada a fines del 2013 por el presidente Barack Obama y con la referida *reforma* de las estructuras po-

²⁷ United States Southern Command: *Posture Statement of Admiral Kurt W. Tidd Commander, United States Southern Command before the 114th Congress Senate Armed Services Committee*, Washington, March 10, 2016, En: www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Tidd_03-10-16.pdf.

lítico-militares de esa organización impulsadas por el Pentágono. Asimismo, con algunas tareas de la ya mencionada segunda fase de la Venezuela Freedom 2 Operation que ha venido desplegando el SOUTHCOM.

Sin duda, en caso de que resulten exitosas todas las acciones hacia el hemisferio occidental que —según mis anticipaciones— desplegará la próxima administración republicana, en el futuro previsible se le creará un contexto hemisférico complicado al actual gobierno cubano, presidido por Raúl Castro, así como al Presidente de los CCEM que resulte electo por los diputados a la Asamblea Nacional de Poder Popular previamente elegidos en los comicios que se realizarán en enero de 2018. Por consiguiente, el escenario más probable de las políticas hacia Cuba que desarrollará el presidente republicano Donald Trump será el abandono de los llamados que reiteradamente Obama le ha realizado al Congreso a que levante el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba. Adicionalmente se ralentizarán (sin abandonarlas totalmente) buena parte de los demás componentes de la *nueva política* hacia ese archipiélago, definida por Barack Obama en su Directiva del 14 de octubre de 2016.²⁸

A lo dicho se unirá la complicación en la ejecución de algunos de los acuerdos que finalmente se hayan logrado concluir antes del 20 de enero

de 2017 entre los funcionarios de alto nivel de la actual administración demócrata y del gobierno cubano, al igual que el condicionamiento a cambios en las políticas internas y externas cubanas de cualquier negociación que se desarrolle entre ambos gobiernos en el futuro previsible. Por consiguiente, en estas no imperarán el espíritu de reciprocidad y el respeto a la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano reiteradamente aceptadas, desde diciembre de 2014, por Barack Obama.

A modo de conclusión

Todo lo antes dicho —y otros elementos excluidos en beneficio de la síntesis— me llevan a concluir que el escenario más probable de las políticas hacia América Latina y el Caribe que desarrollará el próximo gobierno temporal estadounidense presidido por Donald Trump tendrá muchos componentes de continuidad con relación a las desplegadas por su antecesor demócrata; pero la nueva administración republicana le dará un mayor despliegue a las herramientas del llamado *hard power* (incluida las negociaciones desde posiciones de fuerza) que las que tuvo en el gobierno temporal precedente.

Sin embargo, como ya indiqué en la introducción de esta ponencia, ese escenario no es el único posible. A partir de las acciones reactivas, preactivas y proactivas que seguramen-

²⁸ Barack Obama: Directiva Presidencial De Políticas – Normalización Estados Unidos-Cuba (Directiva Presidencial De Políticas/Ppd-43), The White House, Washington, October 14, 2016.

trategias inteligentes y algunas acciones hacia el sur político del continente americano desplegadas por las dos administraciones de Barack Obama. En el segundo, realizaré algunas referencias a algunos de los enunciados sobre *la familia de las Américas* plasmados en la reaccionaria Plataforma del Partido Republicano (PPR) aprobada en la Convención efectuada en Cleveland a fines de julio de 2016. Y, en el tercero, presentaré mis consideraciones preliminares sobre el escenario más probable de las políticas hacia América Latina y el Caribe que desplegarán la maquinaria de la política exterior de defensa y seguridad, así como económico-financieras e ideológico-culturales de los Estados Unidos, al menos, en los primeros años del *gobierno temporal* del controvertido y, para muchos analistas, *imprevisible* magnate inmobiliario y *miembro de la clase capitalista transnacional* Donald Trump.²

Como en otros de mis ensayos, ese escenario se elaborará desde los prin-

cipales conceptos teóricos y metodológicos de la prospectiva crítica. Estos parten del criterio de que el futuro es *más construible que previsible*. Por tanto, *no es único, ni lineal*. Al contrario, pueden vislumbrarse varios escenarios alternos. Ninguno está predeterminado, ya que dependen de los resultados de las acciones reactivas, preactivas y proactivas del *hombre colectivo*. En consecuencia, el porvenir es un *campo de batalla* (muchas veces violento) entre los sujetos sociales y políticos, estatales y no estatales, que *pugnan por imponer su poder para defender sus intereses*.³

En mi consideración, la utilización de esos conceptos es necesaria, ya que en la mayor parte de las aproximaciones que he podido leer sobre la que será la proyección externa de los Estados Unidos durante la próxima administración republicana se olvida que, con independencia de las posiciones personales de cualquier mandatario (por muy megalómano que sea, como es el caso de Donald Trump), la política interna y externa que desarro-

² En la literatura marxista, siempre se han diferenciado los términos Estado y Gobierno. Desde el reconocimiento del carácter socio-clasista de cualquier Estado, el primero alude a lo que se denomina *la maquinaria burocrática-militar* y los diferentes aparatos ideológico-culturales que de manera permanente garantizan la reproducción del sistema de dominación. Mientras que el Gobierno alude a los representantes políticos de las clases dominantes o de sectores de ellas que se alternan en la conducción de la política interna y externa de ese Estado. Curiosamente la diferenciación entre los *gobiernos permanentes y temporales* fue retomada por los redactores del famoso documento Santa Fe I. Con los primeros se referían a lo que en ese texto llamaban *grupos de poder y poderes fácticos*, mientras que los segundos aludían a los gobiernos surgidos de los diversos ciclos electorales u otros cambios no democráticos que se producen en diferentes países del mundo. De ahí la validez de emplear el término *gobierno temporal* para referirnos a las diferentes administraciones demócratas o republicanas que se han alternado en los Estados Unidos.

³ Francisco José Mojica: «Determinismo y construcción del futuro», en Francisco López Segrera y Daniel Filmus (coord.): *América Latina 2020: Escenarios, alternativas, estrategias*, FLACSO-Temas Grupo Editorial, Buenos Aires, No. 2, 2000, pp. 111-125.

llará esa potencia imperial durante su administración será *la resultante* de los consensos que se produzca entre los representantes políticos, militares e ideológico-culturales de diferentes sectores de las clases y los grupos dominantes que participen en las diferentes instancias de los poderes ejecutivo, legislativo y, en algunos casos, judicial. Igualmente, de las percepciones que estos tengan con relación a los resultados (positivos o negativos) de las políticas desplegadas por la administración precedente, tanto para sus propios intereses y cuotas de poder como para la preservación de la que he denominado *seguridad imperial* de los Estados Unidos.

Como he tratado de demostrar en diferentes publicaciones⁴, lo antes dicho contribuye a explicar la continuidad de los objetivos estratégicos, generales y, en algunos casos, específicos, al igual que de muchas de las estrategias y herramientas desplegadas y utilizadas por las diferentes administraciones, aun cuando estas hayan sido controladas por diferentes secto-

res de los partidos demócratas o republicanos estadounidenses. También los cambios de estrategias o el empleo de ciertas herramientas que se han producido entre una y otra administración e, incluso, durante los diferentes mandatos de algunas de ellas.

Los objetivos hemisféricos de las dos administraciones de Barack Obama

Como indiqué en una ponencia que presenté hace unas semanas en un evento internacional efectuado en la Universidad Nacional de Colombia, entre el 2009 y el 2016,⁵ la maquinaria de la política exterior de defensa y de seguridad estadounidense, al igual que sus aparatos económico-financieros, propagandísticos e ideológico-culturales emprendieron diversas acciones públicas, discretas, encubiertas o secretas dirigidas — según indicó Barack Obama durante su primera campaña electoral y reiteró en otros documentos posteriores— a *renovar* y a *prolongar a lo largo del siglo XXI el liderazgo estadounidense en las Américas*.⁶

⁴ Luis Suárez Salazar: *Madre América: Un siglo de violencia y dolor (1898-1998)*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2003; Luis Suárez Salazar: *Un siglo de terror en América Latina*, Ocean Sur (un proyecto de Ocean Press), Melbourne, Nueva York y La Habana, 2006; Luis Suárez Salazar: *Obama: La máscara del poder inteligente*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2010.

⁵ _____: «Las políticas de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe: una mirada después de restablecimiento de sus relaciones diplomáticas con Cuba», ponencia presentada en el evento académico internacional «América Latina en disputa: Estado, gobierno y sociedades en el nuevo milenio», realizado en Bogotá, Colombia, entre el 2 y el 4 de noviembre de 2016 con el auspicio de la Maestría de Estudios Políticos latinoamericanos y del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, así como de la Sociedad Latinoamericana de Economía y Pensamiento crítico (SEPLA), 2016a.

⁶ Barack Obama: *Renewing U.S. Leadership in the Americas*, Obama for America, Washington, 2008.

Con tal fin, durante sus dos administraciones, de manera unilateral o concertada con sus *amigos, socios o aliados*, estatales y no estatales de dentro y fuera del continente americano, la poderosa maquinaria burocrático-militar estadounidense (generalmente con el apoyo bipartidista del poder legislativo) emprendió diversas acciones orientadas a cumplir al menos los siguientes objetivos generales o específicos intervinclados:

1.- Desestabilizar y, donde y cuando le resultó posible, derrocar por medios predominantemente *institucionales* a aquellos gobiernos latinoamericanos y caribeños genéricamente calificados como *antiestadounidenses*. En particular, aunque no únicamente (como se demostró en Paraguay), a los gobiernos que eran (como fue el caso de Honduras hasta mediados de 2009) o todavía son miembros plenos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP): Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y la República Bolivariana de Venezuela. Contra los gobiernos de este último país, presididos por el comandante Hugo Chávez y por Nicolás Maduro, se desplegaron diversas estrategias contrarrevolucionarias bajo el supuesto de que su derrocamiento produciría un negativo *efecto dominó* sobre los gobiernos de los de-

más Estados integrantes del ALBA-TCP (incluido el de Cuba) y para las interrelaciones que estos habían desplegado con otros gobiernos centroamericanos y caribeños en los marcos de PETROCARIBE y del fondo ALBA-Caribe;

2.- Restaurar o fortalecer, según el caso, su multifacética dominación sobre México, sobre todos los Estados-nacionales ubicados en el istmo centroamericano, al igual que en el Caribe insular y continental (Belice, la República Cooperativa de Guyana y Surinam) con vistas a preservar su control sobre los recursos naturales y los bienes públicos (como el agua y la biodiversidad), al igual que sobre los diversos espacios geoestratégicos existentes en el Gran Caribe: el Golfo de México, los estrechos de la Florida y Yucatán, el Paso de los Vientos, el Canal de Panamá, el canal de la Mona y las diversas rutas aéreas, marítimas y terrestres que sirven para transitar entre el Sur y el Norte del continente americano, así como entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Para el cumplimiento de esos propósitos le resultó de mucha utilidad la continuidad de sus estrechos vínculos político-militares con los diversos gobiernos europeos (Francia, Gran Bretaña y Holanda) que mantienen diversas posiciones coloniales en el Caribe insular y continental, así como el fortalecimiento de la dominación colonial estadounidense sobre Puerto Rico. Esta registró un nue-

vo salto de calidad con la aprobación de la denominada Ley PROMESA, aprobada en el 2016 por Barack Obama, y la cual estableció una Junta Fiscal para garantizar, primero que todo, que los gobiernos de ese Estado Libre Asociado pagarán la multimillonaria deuda contraída con diversas instituciones financieras estadounidenses, incluidos algunos fondos buitres;⁷

3.- Lograr una solución político-militar favorable a los intereses geopolíticos y geoeconómicos estadounidenses de la prolongada guerra civil — con contenidos de liberación nacional y social — que hasta mediados de 2016 se estaba desarrollando en Colombia. Sin importar los inmensos costos humanos, sociales y ecológicos provocados por la voluminosa ayuda económica y militar que le ofrecieron diversas administraciones demócratas y republicanas estadounidense,⁸ los éxitos de los gobiernos presididos por Álvaro Uribe y por Juan Manuel Santos, al igual que por las represivas fuerzas militares colombianas en su cruenta guerra *contra la insurgencia y el narco-terrorismo* fueron presentados por la administración de Barack Obama y por el Pentágono como *el modelo* a seguir por los gobiernos y las fuerzas ar-

madas y policiales de otros países de dentro y fuera del hemisferio occidental enfrentados a semejantes amenazas; en particular, por México, por los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), así como por Perú y Paraguay;⁹

4.- Subordinar a los intereses geoeconómicos y geopolíticos estadounidenses a los gobiernos de todos los Estados nacionales del hemisferio occidental ubicados en el *arco del Pacífico*: Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Funcional a ese propósito fueron las negociaciones del Tratado Transpacífico (TPP) impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos como parte de sus llamados *pilares asiáticos*, así como su constante respaldo a la Alianza para el Pacífico (ALPA), institucionalizada en el 2011 entre los gobiernos de México, Colombia, Perú y Chile, presididos por Felipe Calderón, Juan Manuel Santos, Allan García y Sebastián Piñera, respectivamente. Sus antecesores, previamente, habían firmado asimétricos tratados bilaterales de libre comercio con Estados Unidos y ellos o sus sucesores (como fue el caso del mandatario peruano Ollanta Huma-

⁷ Alejandro Torres: «La Junta Fiscal», power point enviado por el autor el 11 de julio de 2016.

⁸ Oto Higueta: «Plan Colombia: un balance a 15 años de su implementación», en: www.facebook.com/America.Latina.en.Movimiento, consultado el 25 de febrero, 2016.

⁹ Arelene Tickner: Colombia, the United States, and Security Cooperation by Proxy, Washington Office on Latin America, marzo, 2014; Sarah Kinoshian, John Lindsay-Poland y Lisa Haugaard: «Estados Unidos no debería exportar el 'éxito' de la guerra de Colombia contra las drogas», en: es.insightcrime.org/analisis/estados-unidos-no-deberia-exportar-exito-guerra-colombia-contra-drogas, consultado el 12 de julio de 2015.

la) firmaron diversos tratados en el campo de la defensa y la seguridad con las dos administraciones de Barack Obama, orientados a *compartir responsabilidades y costos* con la maquinaria militar estadounidense en la *defensa del hemisferio Occidental*,¹⁰

5.- Contrarrestar las amenazas que le plantearon a la *hegemonía* estadounidense en el Hemisferio Occidental y, en particular, en Suramérica la paulatina e inconclusa transformación de la República Federativa de Brasil en una *potencia global*, al igual que aquellas posturas *populistas radicales* o desfavorables a los intereses de los Estados Unidos asumidas por algunos de los partidos (o sectores de ellos) integrantes de las heterogéneas coaliciones políticas que hasta el 2012 apoyaron al gobierno paraguayo presidido por Fernando Lugo, así como las que, hasta el 2015 y el 2016, habían sustentado los gobiernos de Argentina y Brasil, presididos por Cristina Fernández de Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, respectivamente. Asimismo, por algunos de los partidos integrantes del Frente Amplio-Encuentro Progresista que sustentaron y todavía sustentan a los gobiernos uruguayos presididos por José Mujica y Tabaré Vázquez. (Lo antes dicho y lo que veremos en el numeral si-

guiente contribuye a explicar el rápido respaldo que le ofreció la administración de Barack Obama al gobierno argentino presidido por el multimillonario neoliberal Mauricio Macri, así como, antes de que se consumara el *golpe de estado parlamentario-mediático y judicial* que en el 2016 se produjo en Brasil contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff);

6.- Dificultar la reforma y la ampliación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) impulsada por los gobiernos de sus Estados Miembros antes mencionados, así como la profundización de los acuerdos en los campos políticos y de la defensa adoptados por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), en especial, aquellos que cuestionaron los intereses geopolíticos, geoeconómicos (incluidos el control de los recursos naturales estratégicos y los bienes públicos) y geoestratégicos apetecidos por los grupos dominantes en Estados Unidos, cuáles son las estratégicas cuencas de los ríos Orinoco, Amazonas y de la Plata, el portentoso acuífero Guaraní, al igual que los archipiélagos ubicados en el Atlántico Sur y los estrechos y las aguas que lo conectan con el Pacífico Sur y con la Antártida;

7.- Entorpecer las acciones de los diversos gobiernos de América Lati-

¹⁰ Luis Suárez Salazar: «La política hacia América Latina y el Caribe bajo la Presidencia de Barack Obama: una mirada desde la perspectiva crítica», en Darío Salinas (coordinador): *América Latina: nuevas relaciones hemisféricas e integración*, Universidad Iberoamericana A.C., Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, México, [2014] 2016.

na y el Caribe que, entre fines de 2008 y de 2011, condujeron a la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y, como no lo lograron, evitar que sus resoluciones y prácticas obstaculizaran el adecuado cumplimiento de los diversos acuerdos y planes de acción aprobados por las Cumbres de las Américas (ordinarias o extraordinarias) celebradas entre 1994 y el 2015, al igual que por los principales órganos político-militares y político-jurídicos del Sistema Interamericano: la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus diversas Comisiones; la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Junta Interamericana de Defensa (JID).

Funcional a ese último propósito fue la acérrima defensa por parte de los representantes de los Estados Unidos de las controversiales labores desplegadas por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y por la CIDH;¹¹ el apoyo que —modificando sus posturas anteriores y sobre la base de la Ley al respecto firmada por Barack Obama a fines de 2013— el Departamento de Estado comenzó a ofrecerle a *la reforma* de esa organización propuesta por el ex secretario general de ese organismo, José Miguel Insulza, y reimpulsada por su controvertido

sustituto, Luis Almagro. Paralelamente, en correspondencia con la *nueva etapa* de sus relaciones con Cuba anunciada el 17 de diciembre de 2014, así como con sus perdurables propósitos de producir cambios del (o en el) *régimen cubano*,¹² la administración de Barack Obama finalmente aceptó que el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros (CEEM) de la República de Cuba, Raúl Castro, participara, por primera vez en la historia de esos eventos, en la VII Cumbre de las Américas realizada en Panamá en abril de 2015.

Según habían adelantado algunos analistas estadounidenses,¹³ tal decisión tuvo como uno de sus propósitos superar las grandes dificultades que sufrió el desenvolvimiento de ese cónclave durante su VI Cumbre efectuada en el 2012 en Cartagena, Colombia, al igual que re-legitimar a la OEA, en su conjunción con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como *la entidad diplomática multilateral primordial* en la supervisión y gestión de los acuerdos de esas Cumbres destinados al *fortalecimiento de la paz y la seguridad, la promoción y consolidación de la democracia representativa, la resolución de conflictos regionales, el fomento del crecimiento económico y la cooperación al desarrollo, la facilitación del comercio, la lucha contra el tráfico ilícito de dro-*

¹¹ En: Aportes DPLF: «La reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», No. 19, Año 7, abril, Washington, 2014.

¹² Barack Obama: Directiva Presidencial De Políticas – Normalización Estados Unidos-Cuba (Directiva Presidencial De Políticas/Ppd-43), The White House, Washington, October 14, 2016.

¹³ Michael Shifter: «Una relación paradójica», Foreign Affairs: Latinoamérica, Vol. 14: No. 2, 2014, pp. 82-88. Disponible en: www.fal.itam.mx.

gas y el crimen transnacional y el apoyo a la Comisión de Derechos Humanos.¹⁴

Ese propósito coincidió con el interés del Pentágono, expresado en *La política de defensa para el hemisferio occidental* hasta el 2023 difundida en octubre de 2012 por el entonces secretario de Defensa Leon Panetta, en la que, entre otras cosas, se indicó:

Los Estados Unidos, mediante su participación en la OEA y mediante cada uno de nuestros compromisos ínter militares, *promoverán un férreo sistema de cooperación en materia de defensa que procure hacer frente a los desafíos complejos del siglo XXI. [...] Nos esmeraremos por reformar las instituciones existentes y aprovecharlas a fin de lograr una mayor eficacia y unidad de propósitos para abordar esta problemática que afecta a todos los países del hemisferio* (las cursivas fueron incorporadas por el autor de esta ponencia).¹⁵

Con esos y otros fines, a partir de 2014, *la diplomacia político-militar* estadounidense, de conjunto con la Secretaría de la JID, comenzó a impulsar la elaboración de un nuevo instrumento hemisférico que sustituya al inoperante Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), así como la institucionalización de una Comisión Interamericana de Defensa subordinada a la OEA que articule las labores de las Conferencias de Ministro de Defensa de las Américas, de Jefes de

Ejércitos, Marina y Aviación, así como de los subsistemas regionales de defensa existentes en el hemisferio occidental;¹⁶ incluidas las estrechas relaciones ya establecidas entre las fuerzas militares de Canadá con el Comando Norte de Defensa Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés) y con el Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidenses (NORTH-COM), cuya área de responsabilidad abarca el territorio, las costas y el espacio aéreo de Canadá, de los Estados Unidos, incluida Alaska, de México y del archipiélago de las Bahamas, ubicado en la entrada atlántica del estrecho de La Florida.

En los criterios del Jefe de esos dos comandos, almirante William Gortney, esa articulación está orientada a enfrentar las *amenazas tradicionales y no tradicionales* que les plantea a los Estados Unidos la proyección militar, política y económica de Rusia y de la República Popular China en el hemisferio occidental, asimismo, las acciones ciberespaciales, las pruebas nucleares y el continuo desarrollo de misiles balísticos por parte de Corea del Norte, las actividades diplomáticas y las capacidades de misiles balísticos de largo alcance y el programa espacial que está desarrollando Irán y los eventuales ataques terroristas contra el territorio estadounidense que, en el futu-

¹⁴ Congress of the United States of America 2013: Organization of American States Revitalization and Reform Act of 2013.

¹⁵ Leon Panetta: *La política de defensa para el Hemisferio Occidental*. Department of Defense United States of America, Washington, 2012.

¹⁶ JID: El sistema interamericano de Defensa, Secretaría Junta Interamericana de Defensa, Washington, 2013.

ro, pudieran emprender el Estado Islámico y Al-Qa'ida.¹⁷

Una mirada a algunos enunciados de la PPR

No tengo espacio para plasmar mis consideraciones acerca de los importantes logros para la seguridad imperial de los Estados Unidos obtenidos durante las dos administraciones de Barack Obama (en particular durante su segundo mandato), basados en el cumplimiento total o parcial de cada uno de los objetivos generales y específicos señalados en el acápite anterior; tampoco para referirme a los que no pudo cumplir. No obstante, en mi apreciación, unos y otros objetivos serán retomados por la próxima administración republicana; ya que esta, al igual que su antecesora, pero con un lenguaje diferente, quedó comprometida (entre otras cosas que veremos después) a mantener la *posición natural* de los Estados Unidos como líder del mundo libre, a restablecer la ley y el orden y a superar la crisis que está atravesando la seguridad nacional estadounidense.¹⁸

De ahí que, a pesar de la acritud de los tres debates que se produjeron entre la candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton, y del candidato republicano, Donald Trump, los cambios que ambos se proponían introducir en las políticas hacia América Latina y el Caribe pre-

viamente desplegadas por el gobierno temporal de Barack Obama no estuvieron en el centro de la campaña electoral. Esto me induce a pensar que ambos candidatos estaban decididos a mantener esos objetivos así como a continuar la mayor parte de las *estrategias inteligentes* elaboradas e implementadas por la poderosa maquinaria de la política exterior de defensa y seguridad de los Estados Unidos durante los ocho años de esa administración.

Entre otras razones, porque casi todas ellas contaron con el mayoritario respaldo bipartidista en ambas cámaras del Congreso. Como veremos después, una de las pocas excepciones que confirman esa regla fueron el rechazo que encontraron en el Senado o en el la Cámara de Representantes las diferentes enmiendas a las llamadas *leyes del embargo* contra Cuba que presentaron diversos senadores o representantes de ambos partidos políticos después del 17 de diciembre de 2014; incluida la dirigida a restituirle el derecho de los ciudadanos estadounidenses a viajar y a gastar su dinero en la mayor de las Antillas sin que mediara ninguna licencia de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por su sigla en inglés).

De ahí que los dos únicos problemas vinculados directamente a las

¹⁷ William Gortney: Statement of Admiral William E. Gortney, UNited States Navy Commander, United States Northern Command and North American Aerospace Defense Command before The Senate Armed Services Committee, Washington, March 10, 2016.

¹⁸ PPR: Plataforma del Partido Republicano, aprobada en la Convención de Cleveland, 19 julio, 2016.

políticas hacia el Hemisferio Occidental que se abordaron en los diferentes discursos del candidato republicano fueron los vinculados a los negativos efectos que, según sus reiteradas opiniones xenófobas y presuntamente *proteccionistas* y *anti neoliberales*, estaban produciendo en la sociedad, en la cultura y en la economía estadounidense las políticas migratorias y comerciales previamente desplegadas por la administración de Barack Obama y, dentro de esta última, la necesidad de renegociar con el gobierno mexicano el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que, desde 1994, venían aplicando todas las administraciones demócratas y republicanas.

Sin embargo, en la reaccionaria PPR, se acentuó la importancia de darle continuidad, con escasos cambios, a todas las estrategias en los campos comercial, energético, de la defensa y la seguridad que durante la administración de Obama se han venido desplegando de conjunto con los sucesivos gobiernos de Canadá, encabezados por sus primeros Ministros, Stephen Harper y Justin Trudeau, así como con los eslabonados presidentes de México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. A pesar de los ataques verbales contra los mexicanos emprendidos por Donald Trump y de su amenaza de que si ganaba las elecciones, el gobierno mexicano tendría que financiar el muro que desde más de 20 años se viene construyendo en la extensa

frontera terrestre entre ambos países, en la antes mencionada PPR se indicó:

Nuestra atención a los temas del comercio y del medioambiente contribuirá a un fuerte crecimiento económico y a la prosperidad de las Américas. Agradecemos a nuestros vecinos de México y Canadá que hayan sido nuestros socios en la lucha contra el terrorismo y en la guerra contra las drogas. El pueblo mexicano merece nuestra asistencia por su brava resistencia a los carteles de las drogas que trafican con la muerte a ambos lados de nuestras fronteras. Su rica herencia cultural y religiosa, presente en millones de nuestros ciudadanos, deberá contribuir a un mayor entendimiento y cooperación entre nuestros países. Nuestros vecinos canadienses pueden contar con nuestra cooperación y respeto. Para avanzar en la independencia energética de América del Norte, intentaremos revertir el bloqueo de la actual administración al oleoducto Keystone XL. Además de su valor económico, ese proyecto ha devenido un símbolo de la contradicción entre el deseo público al desarrollo económico y la hostilidad gubernamental al crecimiento. Nosotros estamos con el pueblo.¹⁹

A su vez, con el lenguaje antediluviano empleado en algunas de sus partes, en esa plataforma se indicó:

¹⁹ *Ibidem*: 50.

*Un presidente republicano nunca abrazará a un dictador marxista, ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. El actual presidente del poder ejecutivo ha permitido que ese país se haya convertido en un estado narco-terrorista y que una avanzada iraní amanezca a América Central, así como que Venezuela sea un cielo seguro para los agentes de Hezbollah. Y añadió: Hoy con su país arruinado por el socialismo y en la senda del caos, el pueblo venezolano está luchando por restaurar su democracia y recuperar sus derechos. Cuando triunfen, como seguramente ocurrirá, los Estados Unidos estarán listos para ayudarlos a retornar a la familia de las Américas.*²⁰

Sin duda, tales enunciados expresaron el tajante rechazo de los redactores de esa plataforma (algunos de los cuales ocuparán prominentes posiciones en la administración de Donald Trump) a las conversaciones de alto nivel entre los actuales gobiernos de los Estados Unidos y de Venezuela que comenzaron a desarrollarse desde abril del 2015; pero, como se indicó en el primer acápite de este escrito, el contenido de esos enunciados se corresponden con las multifacéticas acciones contra la Revolución Bolivariana desplegadas por las dos administraciones de Barack Obama. Y, en particular, con los agresivos planes que, desde los primeros meses de 2015, ha venido organizando el SOUTHCOM (las llamadas Venezue-

la Freedom 1 y 2 Operation) después que el antes mencionado presidente estadounidense dio a conocer la Orden Ejecutiva de comienzos del 2015 en la que calificó al actual gobierno venezolano como *una amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior y la seguridad nacional estadounidense*.²¹

En esa misma tónica y en correspondencia con las estrategias hacia Colombia desplegadas por la maquinaria de la política exterior, de defensa y la seguridad de los Estados Unidos, así como rechazando de manera implícita el respaldo que la administración de Barack Obama le había ofrecido a los acuerdos de paz que en julio de 2016 todavía se estaban negociando en La Habana entre los representantes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del gobierno de ese país, la antes mencionada PPR señaló:

Reafirmamos nuestra amistad y admiración por el pueblo colombiano y llamamos a los congresistas republicanos a expresar su solidaridad con sus largas décadas de lucha contra las terroristas FARC. Los sacrificios y sufrimientos del pueblo colombiano no deben ser traicionados por el ascenso al poder de los asesinos y señores de las drogas.²²

²⁰ Idem.

²¹ Mark Weisbrot: «Obama face another disastrous Summit due to sanctions against Venezuela», en *The Hill*, April, 9, 2015.

²² PPR: Plataforma del Partido Republicano, aprobada en la Convención de Cleveland, ob. cit., 19 julio, 2016.

Llama la atención que ese último sintagma formó parte de los argumentos empleados por el reaccionario ex presidente y ahora senador colombiano y líder del mal llamado Cambio Democrático, Álvaro Uribe (estrechamente vinculado a algunos de los congresistas cubano-estadounidenses, como Mario Díaz Balart, que apoyaron la candidatura de Donald Trump), para movilizar votos contra los acuerdos de paz firmados en La Habana en el plebiscito para tratar de *blindarlos* que se efectuó en Colombia el 2 de octubre de 2016. Posteriormente, durante la ratificación de la segunda versión de esos acuerdos aprobada por el Senado y en la Cámara de Representantes, los parlamentarios de Cambio Democrático también se opusieron a la segunda versión de esos acuerdos firmada en Bogotá a fines de noviembre de ese año entre el Jefe de las FARC, Rodrigo Londoño (alias Timochenko) y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

Pero mucho antes de que eso ocurriera, Donald Trump, como es su costumbre, comenzó a las declaraciones anteriores que había realizado alrededor de las políticas hacia Cuba desarrollada por la administración de Barack Obama después del 17 de diciembre de 2014. En efecto, buscando captar el apoyo de los electores opuestos a esas políticas, el entonces candidato presidencial republicano comenzó a resaltar sus desacuerdos y, en la misma medida que los fue acentuando, fue asumiendo el

lenguaje ultraconservador en el que está redactada la PPR. Al respecto, en esta se indicó:

Queremos darle la bienvenida al pueblo de Cuba en nuestra familia hemisférica, después que sus corruptos gobernantes sean sacados del poder y rindan cuentas por sus crímenes contra la humanidad. Estamos con las Damas de Blanco y con todas las víctimas del asqueroso régimen que está aferrado al poder en La Habana. Nosotros decimos claramente: ellas han sido traicionadas por aquellos que actualmente controlan la política exterior estadounidense. La *apertura hacia Cuba* de la actual administración fue un vergonzoso acomodo a las demandas de los tiranos. Solo fortalecerán a esa dictadura militar. Llamamos al Congreso a defender las leyes estadounidenses que plantean las condiciones para eliminar las sanciones contra la isla: la legalización de los partidos políticos, prensa independiente y elecciones libres y con supervisión internacional. Reclamamos una plataforma [aérea] para las transmisiones de Radio y TV Martí y la promoción de acceso a Internet como herramienta tecnológica para fortalecer el movimiento pro-democracia en Cuba. Nosotros apoyamos el trabajo de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre y afirmamos los principios de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, reconociendo el derecho de los cubanos a escaparse del comunismo.²³

Es imprescindible resaltar que ese ofensivo y rancio lenguaje fue el em-

²³ Idem.

pleado por Donald Trump en el exabrupto que difundió inmediatamente después que conoció la desaparición física del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. El irrespetuoso contenido de ese mensaje llevó al joven y prestigioso historiador cubano, Elier Ramírez Cañedo, a preguntarse si, al menos en lo correspondiente a Cuba, el próximo mandatario republicano había decidido sustituir las herramientas del *poder inteligente* empleadas por Barack Obama, por las del *poder estúpido* previamente empleadas por otros mandatarios demócratas y republicanos estadounidenses. Acto seguido agregó:

Si Obama se propuso con inteligencia captar simpatías en el pueblo cubano, ya Trump se ganó para siempre la animadversión de la gran mayoría del pueblo cubano con sus declaraciones sobre Fidel. Trump debió estar mejor asesorado y haber sabido que este pueblo es profundamente fidelista y que meterse con Fidel es como meterse con quien es considerado el padre de millones de cubanos, una de las raíces más sensibles de nuestra espiritualidad, del orgullo y la dignidad que significa ser cubano. El pueblo de Cuba no olvida jamás esas ofensas, sobre todo si vienen en horas de dolor y tristeza. Ojalá el recién electo presidente de los Estados Unidos rectificara su conducta, pero de cualquier manera ya

ha sembrado un precedente nefasto.²⁴

El escenario más probable de las políticas hacia América Latina que desplegará la administración de Donald Trump.

Cualesquiera que sean las consideraciones que merezcan esas y otras consideraciones expresadas por el autor de esa cita, todo lo dicho en el acápite anterior y otros elementos excluidos en beneficio de la síntesis, dejan planteadas varias interrogantes que trascienden con mucho las políticas hacia Cuba que emprenderá el próximo gobierno temporal estadounidense. En lo que tiene que ver con los contenidos de esta ponencia, ¿abandonará esa administración todas o solo algunas de las ingeniosas combinaciones entre las herramientas de los llamados *hard* y *soft powers* (*smart power*) empleadas por la administración de Barack Obama con vistas a cumplir todos los objetivos estratégicos, generales o específicos planteados o no en el primer acápite de este trabajo? ¿Esas herramientas serán sustituidas por las propias del que Elier Ramírez denomina *stupid power*?

En mi consideración esas preguntas no tienen una respuesta general. Por consiguiente, considero que para realizar anticipaciones acerca de las estrategias y las herramientas que empleará en sus interrelaciones con América Latina y el Caribe la administración que se inaugurará el 20 de

²⁴ Elier Ramírez Cañedo: «Donald Trump y Cuba: ¿del smart power al stupid power?», en *Boletín Por Cuba* (Año 14, No. 96), La Habana, 6 de diciembre, 2016.

enero de 2017, resulta imprescindible realizar un análisis *case by case* que, además de los antecedentes ideológicos, políticos o militares de los altos funcionarios que ya ha nombrado o que nombrará Donald Trump, tome en cuenta las percepciones que tienen entre los diferentes actores del gobierno permanente de los Estados Unidos sobre los resultados favorables o desfavorables para su poder y sus intereses, así como para la seguridad imperial de los Estados Unidos que tuvieron las políticas hacia el hemisferio occidental emprendidas por la administración precedente.

Ya indiqué que en este escrito no tengo espacio para presentar mis consideraciones sobre los desiguales resultados de esas políticas. Sin embargo, para cumplir los propósitos que plantee en su introducción, creo imprescindible señalar que, en mi apreciación, la próxima administración mantendrá la mayor parte de las estrategias desplegadas y las herramientas utilizadas por la maquinaria de la política exterior, económica, ideológica, de defensa y seguridad de los Estados Unidos durante el gobierno temporal de Barack Obama para garantizar la subordinación de los actuales gobiernos de Canadá y de México a las necesidades geopolíticas, geoeconómicas y geoestratégicas de los Estados Unidos; incluidas las vinculadas con la otrora llamada Alian-

za para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN) impulsada por la administración de George W. Bush, de consuno con el gobierno neoconservador del Primer Ministro canadiense Stephen Harper (2006-2015) y del derechista presidente mexicano Felipe Calderón (2005-2011).

Aunque en los años posteriores se presentaron ciertas contradicciones entre Harper, Obama y el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en la más reciente Cumbre de América del Norte efectuada en Ottawa en junio de 2016, esos dos últimos mandatarios, junto al entonces recién electo primer ministro liberal canadiense, Justin Trudeau, adoptaron diferentes acuerdos para continuar profundizando *la integración de América del Norte*.²⁵ Como ya vimos, la continuación de esa integración con normas ambientales menos exigentes que las actualmente vigentes, estuvo incluida en la PPR. Por consiguiente, con independencia de las renegociaciones del TLCAN con el actual gobierno de México anunciada por Donald Trump como una de las prioridades de sus *primeros cien días en la presidencia* no se abandonará ese propósito largamente perseguido por los representantes políticos, militares e ideológico culturales de diferentes sectores de las clases dominantes estadounidenses; incluidos los dueños y gerentes de las principales corpo-

²⁵ Fidel Vascós: «La Cumbre de América del Norte en Ottawa», ponencia presentada en la XIII Conferencia de Estudios Americanos «Realidades y perspectivas de los procesos progresistas y de Izquierda en Nuestra América», convocada por el Centro de Investigaciones de Política Internacional, La Habana, 19 al 21 de octubre, 2016.

raciones transnacionales que ya tienen incluidos sus enclaves en México entre los eslabones de sus correspondientes *cadenas de valor*.

Algo parecido puede decirse de las estrategias desplegadas por Barack Obama para fortalecer su multifacética dominación sobre ese país, sobre todos los Estados-nacionales ubicados en el istmo centroamericano, al igual que en el Caribe insular y continental (Belice, la República Cooperativa de Guyana y Surinam). Entre ellas, todas las acciones desplegadas por el Departamento de Estado, por el NORTHCOM y por el Departamento de Seguridad de la Patria dirigidas a *bajar* la frontera de seguridad imperial de los Estados Unidos hasta el norte de Guatemala y de Belice. Igualmente, las acciones emprendidas por todas esas estructuras del poder ejecutivo y del SOUTHCOM para contener y tratar de derrotar las *amenazas no tradicionales a su seguridad nacional* en los correspondientes territorios y en las aguas jurisdiccionales de los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica, al igual que de Costa Rica, Panamá y de diversos Estados integrantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Lo antes dicho —junto a los persistentes afanes del SOUTHCOM y de la IV Flota de la Marina de Guerra estadounidense de controlar los espacios marítimos y las rutas aéreas del Mar Caribe y del Golfo de México— seguirá teniendo múltiples implicaciones negativas para los actuales gobiernos de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, encabezados

por Guillermo Solís, Salvador Sánchez Cerén y Daniel Ortega; ya que en esos tres países, además de continuar las estrategias indicadas en el párrafo anterior, la administración de Donald Trump y las fuerzas más conservadoras de los partidos demócrata y republicano ampliarán el apoyo que ya le han venido ofreciendo a las fuerzas sociales y políticas de la derecha costarricense, salvadoreña y nicaragüense.

Por tanto, es de esperar que la próxima administración fortalezca los condicionamientos que ya se le han venido imponiendo al gobierno salvadoreño para recibir los fondos que le corresponden de los 750 millones de dólares aprobados en el presupuesto de 2017 por el Congreso de los Estados Unidos para apoyar el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (asesorado y monitoreado por el BID), así como de los más de 300 millones de dólares dirigidos a fortalecer en el propio año la implementación de la Iniciativa para la Seguridad de América Central (CARSI, por sus siglas en inglés) impulsada desde el 2010 por el gobierno temporal de Barack Obama.

También es de esperar que la próxima administración estadounidense le entregue al actual gobierno de Costa Rica los 30 millones de dólares en ayuda militar que en agosto de 2016 Obama le ofreció a su homólogo costarricense a cambio de su *ayuda* para contener las migraciones incontroladas que se siguen produciendo en Centroamérica, así como

para continuar edificando las instalaciones de la cada vez más militarizada Guardia Civil costarricense que el SOUTHCOM está equipando con vistas a habilitar nuevas facilidades para el desplazamiento de sus fuerzas navales hacia las costas costarricenses del Océano Pacífico y del Mar Caribe. Asimismo, seguramente el nuevo mandatario estadounidense aprobará rápidamente la llamada *Nicaragua Act* que se presentó en ambas cámaras del Congreso en los meses previos a la reelección de Daniel Ortega. Para los senadores y representantes demócratas y republicanos promotores de las sanciones incluidas en esa Ley, los comicios presidenciales que se realizaron en noviembre de 2016 en Nicaragua fueron fraudulentos; entre otras razones, porque no fueron supervisados por la OEA. Para tratar de evitar esas sanciones, el gobierno nicaragüense aceptó que ese organismo supervisara las próximas elecciones municipales.

Por otra parte, a pesar del rechazo de la próxima administración republicana al TPP, se mantendrá su apoyo político-diplomático a la ALPA y a todos los acuerdos en el campo político, económico, militar y de seguridad tanto nacional, como *hemisférica* previamente firmados por el gobierno de Barack Obama con sus contrapartes de Colombia, Perú y Chile; incluido su apoyo al denominado Colombia Peace, Plan impulsado por esa administración demócrata (con el respaldo del Congreso y del Pentágono) para *ayudar* al actual y a los futuros gobiernos colombianos a *ganar la paz* tanto

como los ayudaron a *ganar la guerra* diferentes administraciones estadounidenses demócratas y republicanas.

Paralelamente, la administración de Donald Trump continuará las diversas acciones públicas, discretas y encubiertas que ha venido desplegando la actual administración con vistas a debilitar a la Revolución Ciudadana y favorecer la victoria de las fuerzas de la derecha ecuatoriana en los comicios presidenciales y parlamentarios de febrero de 2017. Por tanto, cualesquiera que sean los resultados de esos comicios, se fortalecerán las relaciones del Partido Republicano y de otras instituciones de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) con todos los sectores de la derecha ecuatoriana, al igual que con la políticamente fortalecida derecha chilena. Contando con ese apoyo, los partidos que la integran redoblarán sus esfuerzos para derrotar al candidato presidencial que presentará la heterogénea coalición ahora denominada Concertación por la Democracia-Nueva Mayoría en los comicios presidenciales que se efectuarán a fines del próximo año. Ese empeño se verá favorecido por las grandes debilidades que ya exhibe el gobierno de esa coalición política, presidido por Michelle Bachelet.

Asimismo, la administración de Donald Trump fortalecerá el ostensible respaldo político que le ha venido dando su antecesor demócrata a los gobiernos derechistas y *neoliberales* actualmente instalados en Argentina, Brasil y Paraguay. Y, al igual que ya venía haciendo la administración de

Barack Obama, continuará sus acciones dirigidas a debilitar y, si le fuera posible, derrocar al gobierno boliviano presidido por Evo Morales hasta el 2020. También a debilitar aún más a los sectores *populistas radicales* y *anti estadounidense* que todavía conservan ciertas influencias en la elaboración de las ambivalentes políticas internas y externas que ha venido desarrollando el gobierno uruguayo presidido por Tabaré Vázquez. Tales acciones se complementarán con un mayor respaldo por parte de los partidos Demócrata y Republicano a los partidos Blanco y Colorado con vistas a lograr la derrota del candidato que presente el Frente Amplio-Encuentro Progresista en las elecciones presidenciales de 2018. Asimismo, a los que presente la derecha golpista brasileña en los comicios de igual carácter del mismo año.

Como ya venía ocurriendo durante el último año de la administración de Barack Obama, en lo inmediato todas esas acciones deberán conducir a la profundización de la crisis que está sufriendo el MERCOSUR y, por carácter transitivo, al debilitamiento de la UNASUR y de la CELAC. Igualmente, a redoblar las acciones que ya venía desplegando diversas instancias de la administración de Barack Obama para lograr *el cerco y la asfixia*, así como *la implosión* de Venezuela con vistas a justificar, lo más rápidamente que les resulte posible y con el respaldo de la *comunidad internacional*, [la] *interven-*

ción humanitaria para mantener la paz y salvar vidas en ese país suramericano prevista en la última fase de la Venezuela Freedom 2 Operation²⁶ que, como se indicó, desde hace meses, ha venido organizando el SOUTHCOM al amparo de la Orden Ejecutiva de Barack de Obama de 2015, ratificada en marzo de 2016.

Con tal fin, la administración de Donald Trump discontinuará los canales de diálogo entre altos funcionarios del Departamento de Estado y del actual gobierno venezolano que se habían habilitado desde la primera y hasta ahora única reunión que sostuvieron los presidentes de ambos, Barack Obama y Nicolás Maduro, durante la VII Cumbre de las Américas efectuada en Panamá en abril de 2015. Pero, como se vio, la antes mencionada administración demócrata no abandonó sus propósitos contrarrevolucionarios. Por consiguiente, con la cancelación de sus diálogos con el gobierno venezolano, la próxima administración republicana estimulará a las fuerzas más reaccionarias de la mal llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) a abandonar definitivamente las complicadas negociaciones que, bajo los auspicios de la UNASUR y del Vaticano, se venían desplegando con el que la PPR denominó *dictador marxista*, quien ha permitido que Venezuela *se haya convertido en un estado narco-terrorista, en una avanzada iraní en América Central y en un cielo seguro para los agentes de Hezbollah*.

²⁶ SOUTHCOM: Venezuela Freedom-2 Operation, 25 de febrero de 2016, difundida y traducida por *Red Voltaire*, 22 de mayo, 2016.

Hay que resaltar que todos esos elementos habían sido incluidos entre los *complejos desafíos no tradicionales* a la seguridad nacional estadounidense listados por el actual Jefe del SOUTHCOM, almirante Kurt Tidd, en la intervención que realizó el 10 de marzo de 2016 ante el Comité de Servicios Armados del senado estadounidense. En esa mirada actual y prospectiva Tidd también incluyó la existencia de *redes criminales transnacionales bien organizadas, bien financiadas, bien armadas y tecnológicamente avanzadas*; las migraciones de *extraños de interés especial* entre los que pudieran incluirse *luchadores terroristas extranjeros* vinculados al Estado Islámico e interesados en emprender actos terroristas en los Estados Unidos o en sus *naciones aliadas*. Igualmente, *las intenciones del actual gobierno iraní de incrementar sus vínculos económicos, científicos y culturales con América Latina; la existencia de una extensa red de militantes y simpatizantes de la organización libanesa Hezbollah, algunos de los cuales están involucrados en el lavado de dinero y en otras actividades ilícitas*, así como en el mantenimiento de *una infraestructura capacitada para emprender o apoyar actos terroristas*.²⁷

Acorde con esos conceptos, en el futuro previsible, la maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad de los Estados Unidos continuará respaldando financiera y militarmente todas las acciones previstas en

la Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI, por su sigla en inglés) previamente impulsadas por la administración de Barack Obama. A la par, los partidos Demócrata y Republicano y las otras instituciones integrantes de la NED, redoblarán sus acciones dirigidas a apoyar a las fuerzas de la derecha que actúan en todos los Estados del Caribe insular y continental integrantes del ALBA-TCP, al igual que en los Estados de la CARICOM y del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) signatarios de los acuerdos de PETROCARIBE.

Con esas y otras acciones — como el condicionamiento de los fondos que aprobó el Congreso estadounidense para el impulso de la Iniciativa para la Seguridad Energética de Centroamericana y el Caribe impulsada desde comienzos de 2015 por la administración de Barack Obama — se buscará debilitar la oposición que hasta ahora han expresado los gobiernos de los Estados integrantes de la CARICOM a las propuestas de aplicarle a Venezuela las sanciones previstas en la Carta Democrática de la OEA impulsadas por su actual Secretario General, Luis Almagro; comprometido con el Departamento de Estado a impulsar *la reforma* de la OEA coincidente con los objetivos de la ya mencionada Ley al respecto firmada a fines del 2013 por el presidente Barack Obama y con la referida *reforma* de las estructuras po-

²⁷ United States Southern Command: *Posture Statement of Admiral Kurt W. Tidd Commander, United States Southern Command before the 114th Congress Senate Armed Services Committee*, Washington, March 10, 2016, En: www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Tidd_03-10-16.pdf.

lítico-militares de esa organización impulsadas por el Pentágono. Asimismo, con algunas tareas de la ya mencionada segunda fase de la Venezuela Freedom 2 Operation que ha venido desplegando el SOUTHCOM.

Sin duda, en caso de que resulten exitosas todas las acciones hacia el hemisferio occidental que –según mis anticipaciones– desplegará la próxima administración republicana, en el futuro previsible se le creará un contexto hemisférico complicado al actual gobierno cubano, presidido por Raúl Castro, así como al Presidente de los CCEM que resulte electo por los diputados a la Asamblea Nacional de Poder Popular previamente elegidos en los comicios que se realizarán en enero de 2018. Por consiguiente, el escenario más probable de las políticas hacia Cuba que desarrollará el presidente republicano Donald Trump será el abandono de los llamados que reiteradamente Obama le ha realizado al Congreso a que levante el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba. Adicionalmente se ralentizarán (sin abandonarlas totalmente) buena parte de los demás componentes de la *nueva política* hacia ese archipiélago, definida por Barack Obama en su Directiva del 14 de octubre de 2016.²⁸

A lo dicho se unirá la complicación en la ejecución de algunos de los acuerdos que finalmente se hayan logrado concluir antes del 20 de enero

de 2017 entre los funcionarios de alto nivel de la actual administración demócrata y del gobierno cubano, al igual que el condicionamiento a cambios en las políticas internas y externas cubanas de cualquier negociación que se desarrolle entre ambos gobiernos en el futuro previsible. Por consiguiente, en estas no imperarán el espíritu de reciprocidad y el respeto a la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano reiteradamente aceptadas, desde diciembre de 2014, por Barack Obama.

A modo de conclusión

Todo lo antes dicho –y otros elementos excluidos en beneficio de la síntesis– me llevan a concluir que el escenario más probable de las políticas hacia América Latina y el Caribe que desarrollará el próximo gobierno temporal estadounidense presidido por Donald Trump tendrá muchos componentes de continuidad con relación a las desplegadas por su antecesor demócrata; pero la nueva administración republicana le dará un mayor despliegue a las herramientas del llamado *hard power* (incluida las negociaciones desde posiciones de fuerza) que las que tuvo en el gobierno temporal precedente.

Sin embargo, como ya indiqué en la introducción de esta ponencia, ese escenario no es el único posible. A partir de las acciones reactivas, preventivas y proactivas que seguramen-

²⁸ Barack Obama: Directiva Presidencial De Políticas – Normalización Estados Unidos-Cuba (Directiva Presidencial De Políticas/Ppd-43), The White House, Washington, October 14, 2016.

te emprenderán todos los actores sociales y políticos, estatales y no estatales, implicados en las relaciones interamericanas tanto en Canadá, como en los Estados Unidos y en los diversos Estados nacionales o plurinacionales, así como en los territorios *no independientes* del sur político del continente americano, podrían configurarse otros escenarios alternos; ya que como se indicó, *el futuro no está predeterminado, es un campo de batalla.*

No obstante, como usualmente les recomendamos todos los cultores de la prospectiva crítica a los practicantes de la Planificación Estratégica por Objetivos o por Valores, más o menos participativa, según el caso, hay que lograr que los actores sociales y políticos implicados elaboren con tiempo suficiente las estrategias y acciones proactivas para enfrentar los peores escenarios y, por tanto, para contrarrestar las amenazas y aprovechar las oportunidades exógenas e, intervinculadas con estas, para superar sus debilidades y potenciar sus fortalezas endógenas.

En mi concepto, en el caso de los gobiernos, así como los representantes políticos, sociales e intelectuales de los pueblos y las naciones de América Latina y el Caribe, la conjunción

virtuosa de esas cuatro variables sigue pasando por lograr su unidad dentro de la diversidad. Así y solo así se podrán aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mundo multipolar y pluri-civilizatorio que se está configurando, al igual que las *nuevas formas que está adoptando la globalización* (Serbín, 2016)²⁹ para contrarrestar las amenazas que les plantea la próxima administración republicana presidida por Donald Trump, quien, a partir de sus vulgares posiciones racistas, misóginas, xenofóbicas y fundamentalistas religiosas, siempre me hace recordar lo planteado por José Martí: *El alma emana, igual y eterna, de los cuerpos diversos en forma y en color. Peca contra la humanidad el que fomenta y propague la oposición y el odio entre las razas. Y agregó: Los pueblos han tener una picota para quien les azuza a odios inútiles; y otra para quien no les dice a tiempo la verdad.*³⁰

¡Digamos las verdades a tiempo! Porque, como también dijo José Martí, *el que pone de lado, por voluntad u olvido, una parte de la verdad, cae a la larga por la verdad que le faltó, que crece en la negligencia y derriba todo lo que se levanta sin ella. Resolver el problema después de conocer sus elementos, es más fácil que resolver el problema sin conocerlos.*³¹

²⁹ Andrés Serbín: Intervención realizada en X Conferencia Internacional de Estudios Caribeños, «Cuba, Estados Unidos y el Caribe a dos años del 17-D», celebrada en la Universidad de La Habana entre el 6 y 8 de diciembre de 2016.

³⁰ José Martí: «Nuestra América», en *José Martí: Nuestra América*, Casa de las Américas, La Habana, ([1891], 1974), p. 2.

³¹ *Ibidem*: 24.